

## NEXO CAUSAL\*

Stanley R. CHESLER

En Estados Unidos, las normas de nexo causal muchas veces dependen de la ley en particular y del tipo de juicio de que se trate. En este caso me voy a referir a la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales (*Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act*, CERCLA), que prevé diversos recursos, cada uno con sus propios requisitos de nexo causal. El requisito de nexo causal para la recuperación de daños a los recursos naturales que establece la CERCLA es muy similar a las normas aplicables en la mayoría de nuestras controversias de derecho común: la parte acusadora debe probar que la liberación peligrosa fue la causa única o principal de cada uno de los supuestos perjuicios a los recursos naturales. Lo anterior quizá contraste con la norma utilizada en las acciones emprendidas en contra de un contaminador para obtener costos de respuesta (principalmente costos de rehabilitación) o por un contaminador que trate de obtener la contribución de otras personas que también participaron en la causa de la contaminación.

Antes que nada, es preciso comprender las circunstancias que las disposiciones relativas a costos de respuesta pretenden atender: cuando se promulgó la ley, Estados Unidos lidiaba con rellenos sanitarios y sitios peligrosos cuya limpieza podía costar miles de millones de dólares y que, en ciertos casos, representaban un riesgo inminente para la población cercana, por lo que era necesario crear un mecanismo para la limpieza expedita y eficiente de tales sitios. A este respecto, algunos de nuestros tratadistas más prominentes han señalado que el requisito de nexo causal prácticamente no existe en la CERCLA. El asunto no llega a tal extremo, ya que esta ley exige responsabilidad solidaria, lo que significa que si un

\* 2008.

relleno sanitario en particular contiene residuos peligrosos depositados por cien empresas diferentes —en jerga ambiental, las posibles partes responsables— la sección 107 confiere al gobierno el derecho a demandar a una sola de ellas y a obtener de ésta la obligación de rehabilitar todo el sitio, a menos que la demandada demuestre que los costos y daños son divisibles, algo que rara vez se puede comprobar. La demandada tiene derecho a iniciar juicio en contra de las demás partes responsables para que éstas contribuyan a cubrir los costos, pero en primera instancia la demandada es la responsable de la rehabilitación de todo el sitio. En la práctica, lo anterior significa que el gobierno no ha iniciado muchos juicios en contra de posibles partes responsables, ya que sabe bien cómo elegir a la persona contra la que puede ejercitar la acción legal. Tratándose de costos de limpieza, la mayoría de los juicios han sido iniciados por empresas o personas que desean obtener compensación o ayuda de otras partes responsables de los residuos.

Por lo tanto, en acciones para obtener costos de respuesta la norma de nexo causal es muy relajada: el demandante simplemente debe probar que las sustancias peligrosas del demandado se depositaron en el sitio en el que ocurrió la liberación y que dicha liberación generó costos de respuesta, pero no tiene que identificar los residuos del acusado. Si, por ejemplo, una empresa descargó en el sitio una sustancia listada como peligrosa, pero puede demostrar que la concentración de sustancias peligrosas en el producto que liberó es inferior a la que se encuentra en suelo virgen, aun así puede declararse responsable. La razón fundamental es que si 1,500 personas depositan la misma sustancia en la misma concentración y en el mismo sitio, se ocasionará un problema ambiental, porque todas las sustancias combinadas exceden con mucho el umbral normal. Lo mismo sucede si el demandado depositó un tipo de sustancia peligrosa y cientos de personas más depositaron otros residuos peligrosos de toda clase en el sitio.

Otra situación puede ser aquella en que una persona posee un terreno y lo renta a un amigo. El amigo almacena en el sitio toda suerte de residuos tóxicos en tambos de 50 galones, que después se filtran al suelo. El propietario puede ser responsabilizado de los costos de limpieza, a menos que compruebe que desconocía la situación y no tenía forma de conocerla. Hubo un caso en el que el agua de pozo de un acuífero fue contaminada con PERC (percloroetileno) proveniente de dos posibles fuentes.

El propietario de uno de los sitios, que era una posible fuente del PERC, hizo que un experto en hidrogeología declarara la imposibilidad de que su PERC hubiera llegado al pozo. El juez de la causa creyó en lo declarado por el experto y no responsabilizó al propietario, pero su decisión fue revocada por el tribunal de apelación. Éste sostuvo que no era requisito demostrar que el PERC había llegado a la fuente en tanto hubiera habido descarga de sustancias químicas que llegaron al pozo.

Pero también hay límites. En un asunto, relativo a contaminación con cromo, un tribunal de apelación resolvió que el demandante por lo menos tenía que establecer algún tipo de nexo (vínculo) entre los residuos descargados por el demandado y el sitio, es decir, demostrar que los residuos peligrosos del demandado habían logrado llegar al sitio de descarga. En ese caso en particular, el demandado había enviado camiones y camiones de cromo a diversos sitios en todo el estado, pero no había pruebas de que alguna vez hubiera enviado cromo al sitio en cuestión, además de que había otras compañías en el estado que también enviaban dicho metal a toda la entidad. Al parecer, éste es el único caso en que un tribunal de apelación estadounidense no responsabilizó a un demandado que había descargado residuos peligrosos.

En términos generales, nuestra interpretación de la CERCLA fue concebida para asegurar que el gobierno cuente con recursos que le permitan emprender la remediación de un daño significativo en particular ocasionado a la sociedad y al medio ambiente, y está basada en una decisión de políticas: si se determina que un demandado ocasionó costos de respuesta, dicho demandado tiene la carga de proceder en contra de otros que hayan contribuido a la contaminación para tratar de que también paguen. De este modo, el gobierno no tiene que andar en busca de todos los posibles responsables para obtener los fondos necesarios para la limpieza del sitio.



## CAUSATION\*

Stanley R. CHESLER

Causation standards in the United States frequently depend on what particular statute and type of lawsuit are involved. I will focus here on the *Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act* (CERCLA). This law has a number of different remedies, which themselves have different causation requirements. The causation requirement under CERCLA for recovering natural resources damages is fairly similar to the standards that apply in most of our common law causes of action: the plaintiff must prove that the hazardous release was the sole or substantially contributing cause of each alleged injury to natural resources. This can be contrasted with the standard that is utilized in actions for response cost (essentially remediation costs) against a polluter, or by one polluter seeking contribution from other individuals who are also involved in the cause of contamination.

One has to understand the circumstances that provisions related to response costs were meant to deal with: the United States was, at the time the law was enacted, faced with landfill sites and hazardous sites that would potentially cost billions and billions of dollars to clean up. These were causing—in some circumstances—imminent hazard to the population surrounding them, and there was a need to come up with a mechanism to clean up those sites expeditiously and efficiently. In this matter, some of our most prominent commentators have indicated that there is almost no causation requirement under CERCLA. It is not quite that extreme, but this statute requires joint and several liability. This means that if a particular landfill is found to contain hazardous waste, which was deposited by one hundred different corporations—in environmental jargon, the

\* 2008.

potentially responsible parties— the government is given under section 107 the right to sue one of them and obtain from that one defendant the obligation to remediate the entire site, unless that defendant shows that the cost and damages are divisible, and that is rarely demonstrated. That defendant has the right to seek contribution from all other responsible parties in a lawsuit to help pay the cost, but in the first instance, he is liable for the remediation of the entire site. In practice, that means that there haven't been very many lawsuits by the government against potentially responsible parties, because the government knows how to pick somebody it can make a case against. In the matter of clean-up costs, most lawsuits have in fact been brought by corporations or individuals seeking compensation or assistance from other parties responsible for the waste.

In actions for response costs, the standard of causation is therefore very relaxed: the plaintiff must simply prove that defendant's hazardous substances were deposited at the site from which there was a release, and that the release caused the occurrence of response costs, but it doesn't have to fingerprint the defendant's waste. If, for example, a corporation discharged a substance listed as hazardous at the site, but can prove that the concentration of hazardous substances in the product it released is lower than what is found in virgin soil, it can nevertheless be held liable. The rationale for this is that if, on the same site, 1500 people deposit that same substance in that same concentration, it will cause an environmental problem, because all the substances combined are way above the normal threshold. The same happens if the defendant has deposited one type of hazardous substance, and hundreds of other people have deposited all sorts of other hazardous waste at the site.

Another situation may be that of a person who owns a piece of land and who leases it to his friend. This friend then stocks that site with all sorts of toxic waste in fifty-gallon drums, which then proceed to leak into the soil. The owner can be held liable for the clean-up costs, unless he proves that he didn't know about it and had no way of knowing about it. There was a case where the well water from an aquifer had been contaminated by PERC (perchloroethylene), for which there were two possible sources. The person owning one of the sites, a possible source of the PERC, had an expert in hydrogeology testifying that there is no way that his PERC could have gotten into the well. The trial judge believed his expert and did not hold him liable. This decision was overturned by

the appeals court, which held that there was no requirement that it be demonstrated that his PERC got to the source, as long as there was a discharge of chemical which got to the well.

There is a limit to it. In one case, the third such dealing with chromium contamination, an appeals court said that the plaintiff at least had to establish some type of nexus (link) between the waste discharged by the defendant and the site—that is, to demonstrate that the hazardous waste of the defendant had made its way to the discharge site. The defendant in that particular case had shipped truckloads and truckloads of chromium to various sites throughout the state, but there was no evidence that he had ever shipped chromium to the site in question, and there were other companies in the state that also shipped chromium around the state. That appears to be the one case where an appeals court in the United States has not held liable a defendant who had discharged hazardous waste.

By and large, our interpretation of CERCLA has been designed to make sure that the government has the resources to engage in remediating a particular substantial harm that has been done to society and the environment. It is based upon a policy decision: that if a defendant is found to have caused any response cost, the burden should be placed upon that defendant to pursue any other contributing polluters to try to get some money from them; the government should not have to go around and seek all the people possibly responsible to obtain the money for the site clean-up.

